

# DE LA PROVINCIA DE ORENSE

9.º— Cuando se interrumpa total ó parcialmente el servicio de la línea por más de un mes á consecuencia de accidentes mercantiles, de diferencias entre la Empresa y sus empleados ó por efecto de cualquier causa imputable á negligencia ó mala organización y régimen de la misma Empresa, el Gobierno podrá hacerse cargo del cable y percibir los ingresos de su explotación, los cuales serán entregados á la Empresa cuando corresponda, deducidos previamente los gastos de administración oficial y los de conser-



vacación, reparación ó modificación y cambio de aparatos que hayan ocurrido. Se entenderá caducada la concesión si la interrupción del servicio excediese de un año, á partir de la notificación oficial hecha á la Empresa, quedando á beneficio del Gobierno los aparatos y demás material utilizable, como parte de compensación de los perjuicios que se originasen al país con la total interrupción del servicio.

10. La correspondencia oficial del Gobierno tendrá la prioridad en todos los casos; gozará de franquicia para su transmisión por el cable, con arreglo á las instrucciones vigentes de servicio en las islas Filipinas, durante los diez primeros años de la presente concesión; devengará la cuarta parte del importe establecido en las tarifas durante los diez años siguientes, y devengará la mitad del indicado importe después de dicho segundo período y hasta el término de la concesión.

11. El concesionario fijará las tarifas á que haya de sujetarse la correspondencia privada que se curse por el cable, cuyos tipos máximos no podrán exceder de los adoptados por las Compañías telegráficas cuyos cables estén en análogas condiciones.

12. La contabilidad por ambas partes se llevará con arreglo á las disposiciones establecidas en el Convenio telegráfico y reglamento internacional vigentes.

13. El concesionario acreditará en Madrid y Manila representantes debidamente autorizados que intervengan en los asuntos ó gestiones que puedan tener lugar entre la Administración española y el expresado concesionario. Estas cuestiones deberá decidirse por los trámites que las disposiciones vigentes establezcan para la inteligencia y efectos de los contratos públicos de Ultramar.

14. El concesionario prestará, á disposición del Ministro de Ultramar, una fianza de cien mil pesetas en metálico ó en valores públicos del Estado, para responder del cumplimiento de las condiciones del establecimiento del cable. Dicha fianza le será devuelta cuando se reciba en el Ministerio la certificación del acta de recepción de dicho servicio, aprobada por el Gobierno general de las islas Filipinas.

15. Hecha la adjudicación de este servicio, se elevará el contrato á escritura pública, siendo de cuenta del concesionario los gastos de ella y de dos copias de la misma, una de las cuales se entregará en el Ministerio de Ultramar.

16. La inobservancia por parte del concesionario de cualquiera de las cláusulas consignadas en el Real decreto de concesión del cable y en este pliego, será suficiente para considerarla nula y de ningún valor.

Aceptado en nombre de la Compañía The Eastern Extension Aus-

tralias and China Telegraph.—Vicente Coromina.

Aprobado por S. M.—Madrid 28 de Marzo de 1898.—S. Moret.

(Gaceta núm. 90.)

#### REAL ORDEN

Excmo. S.: Pasado á informe del Consejo de Estado en pleno el expediente sobre revisión de las leyes de Reunión y Asociación, vigentes en las Antillas, ha emitido, con fecha 3 de Febrero del corriente año, el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 19 de Diciembre último, y para cumplir el Real decreto de 25 de Noviembre anterior sobre identidad de derechos de los españoles, ya residan en las Antillas ó en la Península, fué remitido á informe de este Consejo en pleno el expediente relativo á la revisión de las leyes de Reunión y Asociación, vigentes en las Antillas.

El Negociado correspondiente de ese Ministerio, con el cual se conforman la Sección y la Dirección general de Gracia y Justicia, concretándose á la ley de Asociación, expresa que son idénticas dicha ley y la vigente en la Península, y por tanto, no procede introducir en aquella variación alguna, pues en nada impide el goce de los derechos consignados en el art. 13 de la Constitución.

Aplicada á Cuba y Puerto Rico la ley de Asociación de la Península de 30 de Junio de 1887, por Real decreto de 12 de Junio de 1888, se hizo al efecto una adaptación casi completa, pues donde el art. 2.º de aquella habla de las Asociaciones católicas autorizadas en España por el Concordato, se substituyó esta referencia por la de las disposiciones canónicas y las civiles del Real Patronato; en lugar de hablar en los artículos 3.º, 6.º y 12 de Juzgado de instrucción, se dijo Juzgado de primera instancia; las multas del artículo 10 se elevarán en la proporción de real fuerte por real de vellón; en el art. 13 se suprimió la referencia á la ley de Enjuiciamiento criminal; en el art. 17 se dijo dos días, en lugar de segundo día, y en el artículo adicional se cita la «Gaceta» de la respectiva isla, en vez de la de Madrid.

Es notable la omisión padecida por los Centros de ese Ministerio al no extender la revisión á la ley de Reunión de la Península de 15 de Junio de 1880, pues tanto á ésta como á la de Asociación citada alude el Real decreto de 25 de Noviembre, pero de todas suertes, basta decir que esa ley rige íntegramente en las Antillas, pues fué hecha allí extensiva sin modificación alguna por Reales decretos de 1.º de Noviembre de 1881:

Rigiendo, pues, en su integridad las leyes mencionadas en las Antillas, y no habiendo ocurrido dificul-

tades para su aplicación, en relación con el texto constitucional, así en aquellos territorios como en la Península, no será de temer que en adelante pueda invocarse ni aplicarse en estos particulares, por error ó negligencia, disposiciones que están en contradicción con la letra y espíritu del Código fundamental; pues, sin duda alguna, dichas leyes en nada contrarían, antes bien, amparan y regulan el libre ejercicio del derecho de reunión y asociación, consignados en el artículo 13 de la Constitución.

En suma, el Consejo es de dictamen: que como resultado de la revisión motivo de este expediente, proceda aplicar en las Antillas, en todo su vigor, las leyes de Reunión y Asociación vigentes en la Península, tal como fueron hechas allí extensivas por Reales decretos de 1.º de Noviembre de 1881 y 12 de Junio de 1888.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Marzo 1898.—S. Moret.—Sres. Gobernadores generales de Cuba y Puerto Rico.

(Gaceta núm. 88.)

#### DELEGACION DE HACIENDA DE ORENSE

#### SECCION DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO

Relación de los compradores de bienes del Estado, adjudicados por la Dirección general de Propiedades en 15 del mes actual.

Número del inventario	Nombre del comprador	Vecindad	Fecha de la adjudicación	Cantidad en que fué adjudicada
2.483 al 2.590	D. Camilo Rodríguez Seoane	Villameá	15 Marzo de 1898	51
191 y 291	El mismo	Idem	» » »	28
212 al 233 y 10	D. Bernardino Sotillo	Mézquita	» » »	83
31 y del 2.706 al 2.708	D. José López Molinos	Blancos	» » »	84
2.956 al 2.961	D. José Tellez Alvarez	Cortegada	» » »	109
281 y del 3.365 al 3.367	D. Francisco Comba	La Bola	» » »	200
1.984 al 1986	El mismo	Idem	» » »	33
1.971 al 1.974	D. José Tellez Alvarez	Cortegada	» » »	23
260 al 272	El mismo	Idem	» » »	131
245 al 248 y 13	D. Francisco Comba	La Bola	» » »	192
275	El mismo	Idem	» » »	31
12	El mismo	Idem	» » »	100
16 y del 249 al 259	D. Rafael Suárez	Gomesende	» » »	79
2.881, 291 y 3.502	D. Antonio Sánchez	Allariz	» » »	41
37, 401 al 403	D. Enrique Prada	Nogueiras	» » »	46
389 y 390	El mismo	Idem	» » »	50
2.652 á 2.654	D. José Cid Mangana	Paderne	» » »	30
2.545 al 2.549	D.ª Josefa Pereira Alvarez	Gomesende	» » »	86
				1.397

Lo que se inserta en este «Boletín oficial» recomendando á los Sres. Alcaldes que tan pronto lo reciban, notifiquen á los interesados, para que dentro de los quince días siguientes hagan el ingreso en caja de las sumas importe de sus remates.

Orense 31 de Marzo de 1898.—I. Vizcaino.

#### AYUNTAMIENTOS

##### Avión

Don Manuel Terrazo Casal, Alcalde presidente del Ayuntamiento de Avión.

Hago saber: Que al objeto de verificar la segunda subasta para el arriendo en venta libre de todas las especies de consumo de este término, para el año económico de 1898 á 1899, está señalado el día 12 del entrante mes de Abril y horas de diez á doce de la mañana, en esta casa Consistorial.

Que dicha subasta ha de tener lu-

gar por el sistema de pujas á la llana, y con sujeción al pliego de condiciones que está de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Que el importe total de las especies arrendables y recargos autorizados, es el de 25.223'40 pesetas, siendo el tipo mínimo para hacer proposiciones el de las dos terceras partes de esta cantidad.

Que la fianza que habrá de prestarse consistirá en la cuarta parte del importe por el cual resulte adjudicado el remate, debiendo quedar depositada en la caja municipal.

Que la garantía necesaria para hacer postura será el 2 por 100 del

importe de las dos terceras partes que se señalan como tipo mínimo para el remate, pudiendo esta depositarse por cualquiera de los medios que autoriza el vigente Reglamento de consumos.

Y finalmente, que el remate es tan sólo por un año, y se adjudicará al mejor postor.

Casa Consistorial del Ayuntamiento de Avión á 30 de Marzo de 1898.—El Alcalde, Manuel Terrazo.

IMPRENTA DE A. OTERO

(San Miguel 15)